

R. 018/2018.

TOCA NÚMERO: TJA/SS/056/2018 Y TJA/SS/057/2018
ACUMULADOS.

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/201/2017.

ACTOR: *****.

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE DEL H.
COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL Y
OTRAS.

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN
CASTILLO.



- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de febrero del dos mil dieciocho. -----

- - - **V I S T O S** para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos de los tocas números TJA/SS/056/2018 Y TJA/SS/057/2018 ACUMULADOS, relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/201/2017 y;

RESULTANDO

1.- Que mediante escrito ingresado el diez de julio del dos mil diecisiete, el C. ***** , compareció ante este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: "Lo constituye el ilegal e improcedente Incumplimiento del Pago de Pensión por Vejez, deducido del oficio número DGDH/DRH/STySS/DGP/00274/2017, de fecha 12 de junio del 2017, suscrito y firmado por la Directora General de desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por el que me notifica la respuesta que le hizo llegar el H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, mediante el cual solicita el pago de pensión por vejez, y por oficio número CP/PCT/DJ/0277/2017, de fecha 24 de mayo del año 2017, el C. Ing. Humberto Quintil Calvo Memije, Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión, da respuesta al C. Mtro. Erwin Tomas Martínez Godoy, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria Pública, en la que declara improcedente el

pago de pensión por vejez, sin embargo y no obstante de ser procedente el pago de pensión que omitió el referido Comité Técnico de la Caja de Previsión, el C. Mtro. Erwin Tomas Martínez Godoy, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria Pública, informa al Secretario de Finanzas y administración del Gobierno del Estado, que detectó irregularidades e inconsistencias efectuadas por la misma Secretaria de Finanzas, en la que de manera imprudente e irresponsable me cancelaron la aportación correspondiente al 6% de mi salario, esto sin tomar en cuenta al suscrito toda vez que las autoridades determinaron su actuar, sin ninguna autorización a causa justificada para realizar la cancelación de dicho concepto, sin que esto pueda considerarse legal, ya que dicha cancelación, por lo que esto se considera una violación a mis garantías, en razón de que es una prestación social que por ley tengo derecho, más aun de las actividades que desempeñaba como servidor público, y beneficiario de la Ley de la Caja de Previsión Social, la cual es de carácter obligatorio por el Estado, aunado a ello manifiesto que en mi calidad de servidor público, no fui yo directamente quien realizaba dicho pago o aportación del 6% de manera quincenal, sino que de acuerdo a la Ley el facultado para tal circunstancia es la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, la que realiza los documentos respectivos, asimismo los canaliza directamente al concepto de la clave 151 del recibo de pago, y en su oportunidad se solicitó a la autoridad demandada, Caja de Previsión Social, por ello es evidente que con su actuar está transgrediendo la norma legal, en la que se basa, a sabiendas que por derecho me corresponde, puesto que, para el cumplimiento de esa obligación la caja cuenta de acuerdo a su ley que la rige, con potestad de poder solicitar se apliquen los respectivos descuentos hasta cubrir los adeudos que se tengan, en caso de que se dejara de realizar, así como las facultades para ejercer todas las acciones legales y demás que sean necesarias para lograr el cobro de los adeudos que con ello se tengan y por cualquier concepto, incluso también cuenta con la facultad para sancionar a la pagaduría respectiva, o a los encargados de cubrir los salarios cuando estos no se hubieran efectuado los descuentos autorizados. Con multa equivalente al 10% de la cantidad no descontada, con independencia de la responsabilidad civil o penal, en que incurran, tal y como lo señala el artículo 84 y 90 del Código de la Materia, lo que debieron haber hecho las autoridades demandadas, y si no las realizaron no pueden fundar tampoco su negativa de pago en una omisión de las que con su actuar solo ellas son las

responsables, ya que, al realizarlo con su conducta me están privando de un derecho que por ley me corresponde causando un grave perjuicio al derecho a la seguridad social del suscrito, por causas que no son imputables a mi persona, por tanto vulnerando en mi perjuicio lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 16, constitucional, en relación con los diversos 32, 35 fracción IV, 38 y 41 de la Ley de la Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público Peritos y otros, en consecuencia es de concluirse que es una obligación de las autoridades demandadas otorgar y pagar al suscrito la pensión por vejez, tal y como fue planteado y solicitado al Presidente del Comité Técnico de la caja de Previsión, y que me corresponde a partir de la fecha en que se inició el trámite correspondiente, es decir, fecha en que el suscrito causa baja (16-diciembre-2016). Por lo que solicito a esta autoridad que por ejecutoria que se dicte condene a las autoridades demandadas, a que se me otorgue el pago correspondiente de la pensión por vejez, a partir de la fecha en que el suscrito causa baja (16-diciembre-2016)."; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.

2.- Que por auto de fecha once de julio del dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/201/2017, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el cinco de octubre del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.

3.- Que con fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual: "...En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera que en autos se surten las causales de nulidad e vejez previstas en el artículo 130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado consistente en el acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el

presente fallo, la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, efectuó el pago de las aportaciones que dejó de integrar al H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, por el concepto 151, correspondiente a la cantidad de \$13,490.15 (TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 15/100 M.N), tal y como consta a foja 11 de autos; y una vez cumplimentado lo anterior, dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que reciba la cantidad referida, el H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, proceda a otorgarle al C. ***** , la pensión por jubilación, correspondiente al 100% del sueldo básico, pensión que se comenzará a pagar a partir del día dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, fecha en que causó baja del servicio el C. ***** (foja 042 de autos) y subsecuentes hasta regularizar al beneficiario antes citado en el pago de la pensión referida, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 25, fracción III inciso a), 36 y 38, de la Ley de la Caja de Previsión. Por otra parte, se actualizan se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74, fracción XIV y 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por la que procede el sobreseimiento y se SOBREESE el presente juicio, respecto de los actos impugnados con los incisos a), consistente en el oficio de notificación número DGDH/DRH/ST y SS/DGP/00274/2017, de fecha doce de junio del dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, asimismo, respecto de las autoridades DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.”

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, las autoridades demandadas, interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala Regional presentando sus escritos ante la Sala Regional del conocimiento el día treinta de

octubre del dos mil diecisiete, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su relativa calificación.

5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que fueron por esta Sala Superior los tocas números TJA/SS/056/2018 y TJA/SS/057/2018, mismos que por acuerdo de fecha quince de enero del dos mil dieciocho, de conformidad a lo establecido en el artículo 170 del Código que rige a este Tribunal, se ordena acumularlos de oficio para el efecto de que no haya contravenciones y se decida en una sola resolución, siendo atrayente el primero de los citados, turnándose al C. Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y;

CONSIDERANDO

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución General de la República, 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C. *****
impugnaron los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por las autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como consta en autos a fojas de la 125 a la 134 del expediente TCA/SRCH/201/2017, con fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y al inconformarse las autoridades demandadas, en contra de dicha resolución al interponer los recursos de revisión por medio de escrito con expresión de agravios que estimaron pertinentes con fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, respectivamente, del artículos 178 fracciones V y VIII, en relación con los artículos

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV y 22 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente contra las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver de los presentes recursos de revisión hechos valer por las autoridades demandadas.

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debiera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 135 a la 142 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas, el día veinte y veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, respectivamente, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso para las autoridades demandadas de los tocas TJA/SS/056/2018 y TJA/SS/057/2018, les transcurrió a partir del veinticuatro al treinta y uno y veintitrés al treinta de octubre del dos mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, a foja 12 y 07 de los tocas TJA/SS/056/2018 y TJA/SS/057/2018 ACUMULADOS; en tanto, que los escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional del conocimiento por las autoridades demandadas el treinta de octubre del dos mil diecisiete, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la fojas 01 respectivamente de los tocas de referencia,

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos de los tocas que nos ocupa a foja 03 a la 11 y 01 a la 06, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación:

El representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso el recurso de revisión, argumentando los agravios que a continuación se transcriben:

“Primero: Es de señalar que subsiste interés jurídico para interponer el recurso de revisión, toda vez que la Sala Instructora debió declarar la validez del acto; contrariamente a lo cual, la Magistrada del conocimiento en la sentencia que por esta vía se recurre, expone de manera infundada, un razonamiento incongruente y falto motivación para nulificar, con efectos que la hacen nugatoria, precisamente en su considerando QUINTO en relación con el CUARTO de los puntos resolutive: la cual de manera literal resuelve:

SEGUNDO. - Se declara la NULIDAD del acto Impugnado marcado con el inciso b), en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.

Lo que resulta a todas luces contrario a derecho, por considerar que la sentencia que se impugna no se encuentra debidamente fundada y motivada, como consecuencia debe ser revocada por esa H. Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en razón de que es claro y de manera notable la parcialidad con la que se resolvió, ya que en la misma se omitió cumplir con la garantía de legalidad consagrada en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, por no examinar debidamente las consideraciones vertidas en la emisión del **oficio número CP/PCT/DJ/0277/2017, de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, y el acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete**, que le recayó al oficio número SAAT y DH/DGDH/STSS/01412/2017, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, suscrito por el Mtro. Erwin Tomás Martínez Godoy, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública, ni en la contestación de demanda de nulidad que se envió por escrito de fecha siete de

agosto del año dos mil diecisiete, toda vez que consideró declarar la nulidad del acto impugnado en el presente juicio administrativo, sin observar los lineamientos que el Propio Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé en sus artículos 4, 128 y 129 fracciones II y III, los cuales regulan las hipótesis legales a través de las cuales deben ceñir su acontecer las Salas Regionales de ese Tribunal Administrativo al resolver los casos sometidos a su competencia, los cuales en la parte conducente expresan:

“...ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe...”

“...Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia...”

“...ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictarla resolución definitiva;..”

Es sin duda una diversidad de elementos jurídicos que la Ad quo debió contemplar al dictar sentencia; sin embargo no lo hizo, ya que de acuerdo a su juicio considero que le asiste la razón a la parte actora en sus reclamos que formulo, para declarar la nulidad del acto, sin considerar los argumentos vertidos por ésta Autoridad demandada, en el acuerdo impugnado, ni en la contestación de demanda de nulidad, y para declarar la nulidad del acto, solo se concretó a exponer como parte medular en su considerando QUINTO, lo siguiente:

“...QUINTO.- Expuesto lo anterior, ésta Sala Regional considera que la negativa del Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social, para otorgar la pensión por vejez o jubilación al C. ***** , resulta violatoria de los artículos 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 25 fracción III inciso b), 42 primer párrafo 81, 84 y 90 de la ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, por virtud de las siguientes consideraciones:

Del análisis a las constancias de autos, se observa que el actor ***** , se desempeñó como Oficial 1, desde el quince de febrero de mil novecientos noventa y ocho (foja 60 de autos), asimismo, que tenía una antigüedad genérica de veintiocho años con diez meses (foja 81 de autos), que se le dio de alta ante la Caja de Previsión a partir de la décimo tercera quincena de mil novecientos ochenta y nueve y que la última cotización ante la Caja de Previsión fue en la sexta quincena del año dos mil doce, es decir cotizo veintidós años con siete meses (foja 84 de autos), y que causo baja

del servicio el día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis (foja 42 de autos), y que del último recibo de pago número 6597280 percibido por el actor, consta un ingreso neto por la cantidad mensual de \$6,403.48 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 48/100 M.N), del que se desprende además que la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, no le efectuó la deducción 151 (foja 7645 de autos).

Corolario de los anterior, se puntualiza que la autoridad demandada Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en el acuerdo impugnado niega al C. ***** , los beneficios de seguridad social que le concede la Ley de la Caja de Previsión, en virtud de que al momento de la solicitud de la pensión por vejez/jubilación no la retenían por el concepto 151 de la Ley de la Caja de Previsión, siendo que la obligación de efectuar la retención por el concepto 151 le corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por tanto dicha abstención no es una cuestión imputable al C. ***** , si no que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, fue quien incumplió con su obligación de retener las aportaciones correspondientes.

Ello es así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 fracción 1, y 81 fracciones I, IV y V de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, que disponen que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, como encargada de la pagaduría de los trabajadores del Gobierno del Estado, efectuar los descuentos de las aportaciones de los beneficiarios de la citada ley, tal y como se advierte de la literalidad siguiente:

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO.

ARTICULO 11.-

I.-

(...)

ARTICULO 81-

I-

II-

II-

IV-

V-

VI-

No obstante lo anterior, esta Juzgadora considera importante establecer que el incumplimiento de la obligación del Secretario de

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no deslinda a la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, de su obligación de otorgar la pensión por vejez/jubilación al C. ***** , toda vez que es una prestación de seguridad social obligatoria para los Servidores Públicos beneficiados por la Ley de la Caja de Previsión, prevista en los artículos 25, fracción III, Inciso b), y 42 primer párrafo de la Ley de la Caja de Previsión.

En ese contexto, el incumplimiento de la obligación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, es inimputable al C. ***** , por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 84, 88 y 90 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, la Caja de Previsión ésta facultada para realizar todas las acciones legales y demás que sean necesarias, para el cobro de los adeudos que con ella se le tengan por cualquier concepto, sanciones que serán acordadas y aplicadas por el Comité Técnico e incluso instaurar el inicio del procedimiento de responsabilidades ya sea civil o penal en que incurran, de ahí que ésta Sala instructora concluye que es obligación de la Caja de Previsión otorgar al C. ***** , la pensión por jubilación, y que si la Secretaría de Finanzas no cumplió con la obligación de retener las aportaciones del Policía I mencionado, entonces la Caja de Previsión pueda ejercer su facultad de cobro, así como de imponer las sanciones que mencionan los artículos referidos en líneas precedentes, en este sentido, resulta ilegal la determinación de la autoridad demandada en el acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, toda vez que el actor cumple con los requisitos establecidos en los artículos 36 y 38 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, vulnerando con ello en perjuicio de la accionante, lo dispuesto por los artículos 1o y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 43 fracción b) del Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos- Protocolo de Buenos Aires-; 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales- Protocolo de San Salvador, y, 7, 8, 13, 14, 20, 25, 31, 39, 40, 46, 47, 53, 54 y 59 del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la norma mínima de la seguridad social, suscrito por México, en virtud de haber suprimido las bases mínimas y le fue nugatorio en el acto impugnado el derecho de seguridad social que le asiste.

Al respecto, por analogía de razón resulta aplicable la Jurisprudencia P/J. 26/2016 (10a), con número de registro 2012806, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, Tomo I, pagina 292.

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera que en autos se surten las causales nulidad e vejez previstas en el artículo 130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de los actos impugnados consistente en el acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, y la sesión ordinaria celebrada en fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, efectué el pago de las aportaciones que dejó de integrar al H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, por el concepto 151, correspondiente a la cantidad de \$13,490.15 (TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 15/100 M.N), tal y como consta a foja 11 de autos; y una vez cumplimentado lo anterior, dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que reciba la cantidad referida, el H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, proceda a otorgarle al C. ***** , la pensión por jubilación, correspondiente al 100% del sueldo básico, pensión que se comenzará a pagar a partir del día dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, fecha en que causó baja del servicio el C. ***** (foja 042 de autos) y subsecuentes hasta regularizar al beneficiario antes citado en el pago de la pensión referida, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 25 fracción III inciso b), 42, primer párrafo y 43, de la Ley de la Caja de Previsión, en relación con el artículo 92, 106 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero...”

Situación que irroga agravios a mí representada, lo expuesto por la Sala Regional Chilpancingo, al decretar la nulidad del acto, ya que lo expone de manera infundada, y como consecuencia el razonamiento es incongruente y falta de motivación, ruando refiere que “...el H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, proceda a otorgarle al C. ***** , la pensión por jubilación, correspondiente al 100% del sueldo básico, pensión que se comenzara a pagar a partir del día dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, fecha en que causo baja del servicio el C. ***** , (foja 042 de autos), y subsecuentes hasta

regularizar al beneficiario antes citado en el pago de la pensión referida, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 25 fracción III inciso a), 36 y 38 de la Ley de la Caja de Previsión,...”, lo anterior es así, en virtud de que mi representada la deja en un estado de indefensión, toda vez que ordena que se otorgue al C. ***** , la pensión por jubilación, sin antes, valorar y estudiar los argumentos hechos valer en la contestación de la remanda, así como las pruebas que fueron ofrecidas por mi representada, consistente específicamente en el acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil curso, que le recayó al oficio número SAATyDH/DGDH/STSS/01412/2017, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, suscrito por el Mtro. Erwin Tomás Martínez Godoy, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, de la Secretaria de Seguridad Pública, por el que acompaño documentos del C. ***** , por el que solicita se otorgue el pago de pensión por vejez a su favor, es decir, no valoró el argumento sólido de nuestra parte de que el hoy ex servidor público, dejo de cotizar a la Caja de Previsión, ya que el último recibo de pago que cobro de nómina al momento de su baja por incapacidad total y permanente, ya no contaba con la clave 151, que es precisamente el descuento del 6% que se le hace a todos los servidores públicos citados en el artículo 2 de la Ley de la Caja de Previsión, y al no tener la clave 151 el recibo de pago que exhiben, no se cumple con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de la materia, para poder otorgarle cualesquiera de las prestaciones a que refiere el artículo 25 fracción III inciso a) y 35 fracción II de la Ley de la Caja de Previsión, lo que conlleva a deducir que lo hace sin haber realizado el análisis integral de las consideraciones que se tomaron en cuenta por éste Instituto de Previsión a mi cargo, antes de emitir el acto impugnado, contraviniendo con ello lo estipulado por el artículo 26 del Código de la Materia, que establece que las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes. De lo citado, se desprenden los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a todas las resoluciones que se dicten en los procedimientos contenciosos administrativos, los cuales implican que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación, formuladas por las partes y que no tenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin incurrir en omisión alguna, ni añadir cuestiones no hechas valer, lo que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todos y cada uno de los hechos y prestaciones hechas valer por las partes. Lo que queda de manifiesto, que la Sala Regional, omitió analizar y estudiar en forma congruente y exhaustiva todos los hechos que motivaron ésta autoridad demandada para emitir el acurdo en el sentido como se hizo.

En efecto, se sostiene en primer lugar que la Sala Instructora, inobsero el principio de congruencia, toda vez que al declarar la nulidad del acto, no valoró ni estudió los argumentos hechos valer en la contestación de la demanda y mucho menos as pruebas que fueron ofrecidas por mi representada, independientemente que se haya pronunciado en su considerando CUARTO fojas 11 y 12 de la combatida, empero, no quiere decir que exista el estudio a fondo de

las mismas, tal como se acredita del razonamiento que presuntamente vierte para sostener que existen vicios de legalidad en la emisión del oficio y acuerdo impugnados, lo que sin duda se traduce en una flagrante violación al artículo 124 en relación con el 129 fracción II del Código de la Materia, por inexacta e indebida aplicación de los mismos por parte de la Sala Instructora.

En segundo término y contrario a lo expuesto por la Sala Regional en la sentencia que se combate, se precisa a esa Superioridad que este Instituto de Previsión a mi cargo, al emitir el acuerdo de fecha veintitrés de mayo del año en curso, que le recayó al oficio número SAATyDH/DGDH/STSS/01412/2017, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, suscrito por el Mtro. Erwin Tomás Martínez Godoy, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública, por el que acompaño documentos del C. *****
por lo que solicito pago de pensión por vejez a su favor, fue emitido en estricto derecho, cumpliendo con los requisitos legales de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad de conformidad a lo estipulado en los artículos 14 y 16 Constitucional, entendiéndose por el primero que ha de expresarse con precisión, el precepto legal aplicable al caso concreto y por el segundo, que también debe señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que existe una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso en concreto se configure la hipótesis normativa.

Es por lo anterior, que se sostiene que la Sala Regional instructora, al no fundar ni razonar adecuadamente el por qué considera declarar la nulidad del acto impugnado violenta lo previsto en los artículos 4, 124, 125, 128 y 129 fracciones II III y IV, los cuales regulan las hipótesis legales a través de las cuales deben ceñir su acontecer las Salas Regionales de ese Tribunal Administrativo al resolver los casos sometidos a su competencia, ello es así en razón de que se insiste resolvió el presente juicio de nulidad sin observar los lineamientos que el Propio Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, impone a esa Autoridad Jurisdiccional, ni analizar a fondo las constancias probatorias exhibidas por esta autoridad como medio de prueba al contestar la demanda de nulidad.

Segundo.-Es otra fuente de agravio la sentencia que se combate, dictada por la Sala Regional Chilpancingo, toda vez que el criterio esgrimido para decretar la nulidad del acto, deduce la existencia de parcialidad en beneficio de la PARTE ACTORA, y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, cuando refiere medularmente que:

"... el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, efectué el pago de las aportaciones que dejó de integrar al H.

COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISION, DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, por concepto 151, correspondiente a la cantidad de \$13,490.15 (TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 15/100 M.N) tal y como consta a foja 113 de autos; y una vez cumplimentado lo anterior, dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que reciba la cantidad referida, el H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, proceda a otorgarle al C. *** , la pensión por jubilación, correspondiente al 100% del sueldo básico, pensión que se comenzara a pagar a partir del día dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, fecha en que causo baja del servicio el C. ***** , (foja 042 de autos), y subsecuentes hasta regularizar al beneficiario antes citado en el pago de la pensión referida, lo anterior, en términos de los dispuesto por los artículos 25 fracción III inciso a), 36 y 38 de la Ley de la Caja de Previsión.”**

En efecto, se sostiene lo anterior, toda vez que la Sala Instructora, al resolver la recurrida, rotundamente cambia su criterio y no toma en consideración y/o antecedente la resolución de fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, emitida en el expediente número TCA/SRCH/028/2016, página 12, máxime que fue dictada y firmada por la misma Sala Regional a cargo de la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCIA, en su carácter de Magistrada y ante el Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, ya que en el caso en concreto es idéntico el acto impugnado, es decir, lo constituye la negativa de otorgar la pensión por riesgo de trabajo a favor de la C. ***** , en representación de su menor hijo ***** , por el fallecimiento de su esposo ***** , con la categoría de POLICIA 2, por no contar con la calve 151, es decir, al momento de su deceso ya no cotizaba a la Caja de Previsión, resolución que obra en los archivos de la Sala Regional Chilpancingo, y en lo que interesa al suscrito, se transcribe lo siguiente “...el efecto fue para que la autoridad demandada COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISION. DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Caja de Revisión, de los Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, proceda a devolver a la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el monto total de las aportaciones que correspondan a favor de ***** , con la categoría de POLICIA 2, asimismo, se ordena a la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO otorgue a la C. MARENA LILI RIOS BARRERA, en su representación

de su menor hijo Sergio Alberto Carrera Calderón, la pensión por muerte a causa de riesgo de trabajo, por un monto cual al 100% del sueldo básico Que hubiere percibido su esposo finado ***** , con la categoría de POLICIA 2, de manera retroactiva a partir del momento de su fallecimiento en adelante, es decir, desde el día siete de noviembre de dos mil doce...”, contenido que se debe atraer y tomar en cuenta a momento de resolver el presente juicio de nulidad, en el sentido de que a la renuncia del hoy actor ya no cotizaba a la Caja de Previsión, por tratarse de un hecho notorio para esa Sala Superior, en términos de lo establecido en la tesis 43/2009, número de registro 167593, Materia Constitucional, Novenas Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Abril de 2009, página 1102, que a continuación se cita, y que se considera aplicable por analogía de razones.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.

Máxime C. Magistrada que esa Sala Superior a su digno cargo, confirmo determinación mediante resolución de fecha dos de febrero del 2017, en los autos del toca TCA/SS/436/2016, relativo al Recurso de Revisión interpuesto por el autorizado de la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, v que obra en autos.

Lo anterior, es con el objeto de probar mi dicho y se solicita a esa Superioridad que al momento de resolver el medio de impugnación, tome en cuenta como hecho notorio dicho criterio, se omita anexar copia por que obra en autos la resolución de fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, emitida en el expediente número TCA/SRCH/028/2016, por la Sala Regional Chilpancingo, en la que se observa y sostiene firmemente el criterio que defiendo y que invoco en el presente asunto.

Por consiguiente, a esa Superioridad se le manifiesta que en la especie acontecen los elementos necesarios para revocar la recurrida y ordenar a la Sala Regional Chilpancingo, emita otra en donde resuelva en igual similitud a la fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, emitida en el expediente número TCA/SRCH/028/2016, por ser idéntico el acto impugnado, en el sentido de que a la renuncia del hoy actor ya no cotizaba a la Caja de Previsión, toda vez que es responsabilidad de la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, quien efectúa los descuentos a los servidores públicos que señala el artículo número 2 de la Ley de la Caja de Previsión, es decir, que se le aplique el descuento de la clave 151 del recibo de pago de nómina ce os Policías del Estado, de esta situación se informó a la C. Magistrada cuando se contestó la demanda interpuesta por el hoy actor del juicio, que por razón ya conocida a la fecha de la contingencia del C. ***** , ya no estaba cotizando al instituto como lo señala el artículo 79 de la Ley de la Caja de Previsión, como

cierto es eje ni el ex servidor público tiene la culpa, ni el Instituto que represento, si no la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, ya que de una forma ARBITRARIA le fue suspendido ese concepto de descuento al recibo de pago de nómina clave 151 a varios servidores público de los señalados en el artículo número 2 de la Ley antes citada.

Es por ello que se insiste y solicita a esa Superioridad, que del análisis integral eje se vierta a las constancias aludidas en párrafos que anteceden, se determine revocar la sentencia dictada por la Sala Regional Chilpancingo, toda vez que no puede casar desapercibido el falto análisis jurídico que vertió en la misma, aduciendo a favor de la PARTE ACTORA y de la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, criterio que indudablemente irroga agravios, por apartarse de todo sustento jurídico, ante el evidente actuar de la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, quien es la que se encuentra vulnerando al hoy actor, lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y otros preceptos jurídicos que señalo en su escrito de demanda, en virtud de que el C. ***** , no puede disfrutar de los beneficios de la Caja de Previsión, debido a que la referida DEPENDENCIA incumplió con la obligación de seguir realizando las aportaciones ante a Caja de Previsión del hoy ex servidor público y otros, por consecuencia, dicha situación genera responsabilidad de tal Dependencia, en este tenor y ante el incumplimiento que como patrón le correspondía realizar, la consecuencia inmediata es que la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, como dependiente del Ejecutivo del Estado y como encargada del área de Nominas de Personal del Gobierno del Estado, es a la que corresponde liberar las prestaciones que en derecho procedan al C. ***** , toda vez que es ella a la que corresponde realizar los pagos de nómina, así como de actuar de conformidad con lo estipulado por los artículos 11,80 y 81 de la Ley de Caja de Previsión, de los Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero.

En base a lo anterior, no le asiste la razón a la Magistrada Instructora, toda vez que la A quo no adecuó su acontecer a las directrices que le indican los artículos 128 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, dado que sin más ni más arriba a la conclusión de que: "... considera que en autos se surten las causales de nulidad e vejez previstas en el artículo_130 fracción- III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado...". Por lo que la sentencia recurrida no, se encuentra ajustada a derecho, al no indicar cuáles son las consideraciones lógicas- jurídicas que tuvo a bien considerar para arribar a tal o cual determinación tal como lo mandata el artículo 129 fracción III del Código Administrativo Vigente en el Estado; toda vez que como se

estableció en párrafos anteriores, la sentencia de fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, dictada por la Sala Regional Chilpancingo, no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues no satisfizo los requisitos de legalidad, al no citar con precisión los preceptos legales, sustantivos y adjetivos aplicables y que motivación es la cita, así como tampoco con precisión de las circunstancias especiales razones particulares o causas inmediatas en que se apoyó para la emisión o determinación adoptada; y al no expresar una serie de razonamientos lógicos-jurídicos sobre él porque considero que en el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, la cual quedo de establecida en el considerando QUINTO de la sentencia que hoy se combate, no son suficientes para acreditar que el H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, proceda a otorgarle al C. ***** , la pensión por jubilación, mas sin embargo, dichas consideraciones pasaron desapercibidas para la Sala Instructora, desestimando las cuestiones de hecho y de derecho expuestas por éste Instituto de Previsión al contestar la demanda de nulidad, colíguese de lo expuesto, que substancialmente el medio de impugnación que se expone en vía de agravios ante la presente Superioridad, motivan su proceder las razones lógicas jurídicas siguientes:

A).- De manera indebida la Magistrada de la Sala Regional declaró la nulidad de nuestro acto en la resolución impugnada, porque no tomó en cuenta los argumentos expuestos y las pruebas ofrecidas por mi representada, y que solamente se concretó a generalizar los argumentos expuestos como conceptos de violación por la parte actora, los cuales a través de su escrito de demanda de nulidad resultaban infundados ante la falta de argumentos lógicos jurídicos tendientes a combatir las consideraciones expuestas en la resolución dictada en el expediente de marras.

B).- La sentencia recurrida viola lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque no resolvió de manera congruente la demanda y la contestación, así como todos los puntos que hayan sido objeto de controversia, tampoco fijó de manera clara y precisa los puntos controvertidos, examinó ni valoró las pruebas rendidas, menos aún, las tomo en cuenta, omisión de la Sala natural que se acredita a fojas 11 y 12 de la sentencia combatida.

En el caso que nos ocupa, atendiendo lo expresado, el argumento esgrimido por la Magistrada Instructora, para declarar la nulidad del acto impugnado, no es aplicable al caso sometido a su potestad de decisión, en virtud que la Sala Regional resolvió contrario a derecho al declarar la nulidad del acto reclamado, por lo que en las anotadas condiciones se solicita, a esa H. Sala Superior del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, revoque la sentencia dictada por la Sala Regional Chilpancingo, en razón de que el razonamiento expuesto para declarar la nulidad del acto emitido por éste Instituto de Previsión, es infundado y por ende improcedente, lo que se concluye que no existe incumplimiento y

omisión por parte de la PRESIDENCIA DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISION, DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, en otorgarle al C. SIXTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, la pensión por jubilación, sino que es la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, quien es la que se encuentra vulnerando al hoy actor, lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y otros preceptos jurídicos que señalo en su escrito de demanda, virtud de que el C. *****
*****, no puede disfrutar de los beneficios de la Caja de Previsión, debido a que la referida DEPENDENCIA incumplió con la obligación de seguir realizando las aportaciones ante la Caja de Previsión del hoy actor y otros, pues como quedo acreditado en líneas que anteceden, se desvirtúa lo aseverado por la Sala Regional Chilpancingo, al resolver en el sentido como lo hizo.

Por todo lo anterior, ante la incongruencia del fallo emitido por la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, lo procedente es, que en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el Código de la Materia le confiere a esa Plenaria, se imponga a revocar la sentencia combatida de conformidad en lo dispuesto por los dispositivos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y 1o, 129 fracción V, 168, 169, 178 fracción VIII, 181, 182, 183 y 187 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en atención a los fundamentos y razonamientos legales expuestos, deberá declarar legalmente la validez del acto impugnado, dictado por el Instituto de Previsión a mi cargo.”

El representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso el recurso de revisión, argumentando los agravios que a continuación se transcriben:

“Causa agravio a la autoridad demandada que se representa la resolución combatida en general en todas y cada una de sus partes, especial y concretamente por cuanto a los puntos resolutivos TERCERO Y CUARTO ya que generaliza la misma condena tanto para mi representada como para la autoridad diversa, cuando en todo contenido de la presente resolución y especialmente su considerando QUINTO esta Sala Instructora reconoce que el acto deriva directamente de acciones de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, lo que en su momento acredito la propia actora exhibiendo los documentos que demuestran lo antes dicho pruebas que también esta Sala reconoce en esta improcedente resolución que se combate, en ese entendido debe entenderse a esa Dependencia Estatal es decir la Caja de Previsión como la autoridad ordenadora y ejecutora, lo anterior en virtud de que no se acredito

fehacientemente que existiera algún adeudo de mi representada para con la citada Caja de Previsión, por lo que con lo antes mencionado en líneas arriba descritas es de notar que resulta incoherente que esta Sala generalice y condene a la que se representa en sus puntos resolutivos y último considerando cuando en los demás considerandos manifiesta la razón de mi dicho, es así que no existen los elementos y/o las agravantes que encuadren y evidencien a mi representada como autoridad ordenadora o ejecutora por la cual es de sobreseer el presente juicio por cuanto a esta Autoridad que se representa pues no existe acto, acción o hecho que vulnere alguna garantía individual del actor en este juicio, como lo estipula el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que textualmente dice:

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.

En ese contexto debe entenderse que mi representada **Secretaría de Finanzas y Administración del Estado**, no ha incurrido en responsabilidad alguna de ningún carácter, pues como ya lo he señalado en líneas que anteceden este mismo Tribunal en esta Resolución combatida y el mismo actor en su escrito de demanda ambos reconocen que el actor dependía de la Coordinación ya citada, por lo que nunca debió ser llamada a juicio ni mucho menos ser condenada como improcedentemente lo pretende hacer valer esta Sala de Instrucción, entonces este multicitado Órgano de Justicia debe reconsiderar y revocar la presente resolución en sentido de sobreseer el presente asunto por cuanto a mi representada **Secretaría de Finanzas**, pues ha quedado demostrado que esta no ha violentado las garantías individuales estipuladas en los artículos constitucionales marcados con los números 14 y 16.

Es preciso señalar y recalcar que el reconocimiento es por otra autoridad diversa a esta, por ende, este Tribunal debe revocar y sobreseer el presente asunto por cuanto a la Secretaría de Finanzas, lo anterior, para los efectos legales conducentes, en consecuencia es de mencionar que lo que se combate es una resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la contraparte en su escrito inicial de demanda, con las contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas por las partes o de las derivadas del expediente, así como de las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, transgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que rige todo procedimiento contencioso.

Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma oportuna por mi representada y de los propios autos se advierte, que no existe acto impugnado a esta autoridad, como tampoco hechos directos impugnados a ésta, con los que acredite fehacientemente y

no a través de presunciones lo supuesto en el escrito de demanda, acción que no se expresa que haya sido ejecutada por mi representada, ni probanza alguna que así lo acreditara, no obstante de que la parte actora está doblegada a acreditar y probar plenamente tal acto impugnado, luego entonces, procedía decretar la improcedencia y sobreseimiento del juicio y no basar su resolución por medio de presunciones y emitir una resolución infundada e inmotivada ya que no existe una narración, descripción, análisis y valoración exhaustiva de las probanzas con las que acreditara plenamente sus consideraciones con las que pretende sustentar su fallo en contra de mi representada, máxime que es bien sabido que en materia administrativa, no se rige bajo el criterio de presunciones, como si lo es en materia laboral por lo que el actor estaba obligado a demostrar plenamente todos y cada uno de los actos impugnados, hechos y conceptos de nulidad esgrimidos.

Dicha resolución que se combate, causa molestia ya que para que dichos actos sean constitucionalmente válidos, es menester que éstos se encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa expresión de las disposiciones legales aplicables al caso particular y el motivo de su aplicación, que debe soportar los actos de autoridad, así como de expresar los motivos y razones que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de que estuviera firme la resolución administrativa recurrida.

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

En este contexto no podemos apartarnos que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad es substanciar y resolver las controversias en materia administrativa que se planteen entre los particulares y las autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre otras, en donde toda resolución que se emita debe ser clara precisa y congruente con las cuestiones planteadas por cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este la emita de forma congruente con la demanda y la contestación y en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido objetivos de la controversia, tal y como lo establece los numerales 1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado.

Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios jurisprudenciales siguientes:

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia fiscal-, la congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede ir más allá ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

Igualmente tiene aplicación también por los principios jurídicos que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que ese Tribunal comparte y que aparece publicada en la página 745 del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995 tomo III, Materia Administrativa, que establece:

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.

Si el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que para que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, debe observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste, es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los conceptos expuestos por los inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 16 constitucional.

Novena Época

Registro: 192097

Instancia: Pleno

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000

Materia(s): Común, Tesis: P./J. 40/2000

Página: 32

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.

Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el

criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.”

IV.- Del contenido de los agravios que expresan las autoridades demandadas en el recurso de revisión esta Plenaria hace su análisis en forma conjunta, apreciando que dichos agravios resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, la A quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el recurso de revisión las cuales resultan ser inoperantes; asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción III del Código de la Materia para determinar la nulidad del acto impugnado, debido a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, consecuentemente el acto de autoridad, no reúnen los requisitos que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez; en estas circunstancias, a juicio de esta Plenaria deviene infundada e inoperante la causal invocada por las autoridades demandadas, razón por la cual, se comparte el criterio adoptado por la A quo al resolver acertadamente entrar al estudio y análisis del acto impugnado que se combate en el presente juicio.

En esas condiciones, los agravios que esgrimen las autoridades demandadas, carecen de fundamento al pretender que se revoque la sentencia controvertida, ello en razón, de que esta Plenaria considera correctos los argumentos que hace valer la A quo, toda vez de que como se observa de autos que efectivamente el C. ***** , se desempeñó como Policía 1 desde el quince de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, asimismo, que tenía una antigüedad genérica de veintiocho años con diez meses (foja 81 de autos que se dio de alta ante la Caja de Previsión a partir de la décimo tercera quincena de mil novecientos ochenta y nueve que la última cotización ante la Caja de Previsión fue en la sexta quincena del año dos mil doce, es decir, cotizó veintidós años con siete meses (foja 84 de autos), que causó baja del servicio el día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis (foja 2 de autos) y que del último recibo de pago número 6597280 percibido por el actor, se desprende que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no le efectuó la deducción 151.

Luego entonces, la negativa del Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, para otorgar la pensión por vejez al C. ***** , resulta violatoria de los artículos 1º y 123, apartado B,

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVI de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 43 fracción b), del Protocolo de reformas la Carta de organización de los Estados Americanos –Protocolo de Buenos Aires–; 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador– y 7, 8, 13, 14, 20, 25, 31, 39, 40, 46, 47, 53, 54, y 59 del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo relativo, a la norma mínima de la Seguridad Social, suscrito por México, en virtud de haber suprimido las bases mínimas y de haberle hecho nugatorio el derecho de seguridad social que le asiste, 2 fracción II, 25 fracción III, inciso b), 42 primer párrafo, 81, 84 y 90 de la Ley de la Caja y Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero; ello en atención, de que en el momento de la solicitud por vejez no le retenían por el concepto 151 de la Caja de Previsión, siendo que la obligación de efectuar la retención por el concepto 151 le corresponde a la Secretaría de Finanzas del Estado, toda vez de que es una prestación de seguridad social obligatoria para los Servidores Públicos beneficiados por la Ley de la Caja de Previsión, prevista en los artículos 25, fracción III, inciso b) y 42, primer párrafo de la Ley de la Caja y Previsión; por tanto, dicha abstención no es una cuestión imputable al C. ***** , sino que dicha Secretaría de Finanzas, fue la que incumplió con su obligación de retener las aportaciones correspondientes, resultando evidente la violación a los derechos del C. ***** , que debido a la referida conducta de omisión se le prive de recibir una pensión por vejez/jubilación que por ley le corresponde, máxime que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 42 y 45 de la Ley de la Caja de Previsión, vulnerando con ello en perjuicio del accionante lo dispuesto por los artículos 1º y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, 88 y 90 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, que facultan a la Caja de Previsión para realizar todas las acciones legales y demás que sean necesarias, para el cobro de los adeudos que con ella se le tengan por cualquier concepto, sanciones que serán acordadas y aplicadas por el Comité Técnico e incluso instaurar el inicio del procedimiento de

responsabilidades, ya sea civil o penal en que incurran, de ahí, que esta Plenaria comparta el criterio de la Sala Regional de Chilpancingo, concluyéndose que en efecto es obligación de la Caja de Previsión otorgar al C. *****
*****, la pensión por vejez/jubilación, y que sí la Secretaría de Finanzas incumplió con la obligación de retener las aportaciones del Oficial de Policía, dicha acción no es imputable al actor del juicio.

Al efecto se transcribe el artículo 79 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

“ARTICULO 79.- Todo personal comprendido en el artículo 2o. de este ordenamiento, deberá cubrir a la Caja de Previsión una aportación obligatoria del 6% mismo que se aplicará para cubrir las prestaciones y servicios comprendidos en esta Ley.”

Pasando desapercibido que el artículo 2 fracción II de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, establece que tiene por objeto beneficiar entre otros servidores públicos, al personal que integra la Policía Preventiva Estatal.

A su vez el artículo 25 del ordenamiento legal antes citado establece como beneficios en favor del personal incluido las prestaciones consistentes en:

“ARTICULO 25.- Se establecen a favor del personal incluido en la presente Ley, las siguientes prestaciones:

- I.- El seguro de vida;
- II.- Pago de gastos funerarios en caso de fallecimiento del trabajador o alguno de sus derechohabientes, dependientes económicamente del Servidor Público;
- III.- Pensiones por:
 - a). - Jubilación;
 - b). - Vejez; y
 - c). - Causa de muerte.
- IV.- Gastos por prestaciones médicas extraordinarias;
- V.- Becas para los hijos de los trabajadores;
- VI.- Préstamos:
 - a). - Hipotecarios; y
 - b). - Corto y a mediano plazo.
- VII.- Indemnización global.”

Ahora bien, para el cumplimiento del objeto de la Ley de la Caja de Previsión, se establece un régimen de aportación obligatoria tanto del personal comprendido en el artículo 2 de su ley, consistente en un 6% de su salario, así como del Gobierno del Estado, por otra cantidad equivalente al 6% del salario anual de cada trabajador, como se establece en los artículos 79 y 80¹ de la Ley en cita.

De ahí que el sistema de seguridad social, que establece la Ley de la Caja de Previsión, en favor de los servidores públicos en ella quedan comprendidos y opera bajo un régimen legal obligatorio, tanto para los trabajadores como para el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, para lo cual se señalan obligaciones y facultades para ésta y la Caja de Previsión, en cuanto prevé en su artículo 81 que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se encuentra obligada entre otras a efectuar el descuento de las aportaciones del personal, enviar a la Caja de Previsión las nóminas en que figuren los descuentos y entregar a la Caja de Previsión la cantidad recabada por concepto de aportaciones de los trabajadores y el numeral 84 faculta a la Caja de Previsión para ejercer todas las acciones legales necesarias para el cobro de los adeudos que con ella se tengan por cualquier concepto.

Al efecto se transcriben los artículos 81 y 84 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero:

“ARTÍCULO 81.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, está obligada a:

- I.- Efectuar el descuento de las aportaciones del personal a quien corresponda la aplicación de la presente Ley;
- II.- Enviar a la Caja de Previsión, las nóminas y recibos en que figuren los descuentos dentro de los diez días siguientes a la fecha en que debieron hacerse;
- III.- Expedir las certificaciones e informes que le solicite la Caja de Previsión o el Trabajador;

¹ **ARTICULO 80.-** El Gobierno del Estado cubrirá a la Caja de Previsión, una aportación equivalente al 6% del salario anual de cada trabajador en las parcialidades que fije el presupuesto de egresos.

IV.- Entregar quincenalmente a la Caja de Previsión la cantidad recabada por concepto de aportaciones de los trabajadores;

V.- Realizar el pago autorizado por la Oficialía Mayor de Gobierno, en relación al artículo 80 de la presente Ley; y

VI.- Los demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en el Estado.”

“ARTICULO 84.- La Caja de Previsión está facultada para ejercer todas las acciones legales y demás que sean necesarias, para el cobro de los adeudos que con ella se le tengan por cualquier concepto.”

Dentro de ese contexto, los descuentos y aportaciones a la Caja de previsión no son optativos para los trabajadores comprendidos en la Ley respectiva, ni para la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ya que éstas se traducen en los beneficios de protección para salvaguardar la seguridad de los referidos trabajadores.

De esa manera, el incumplimiento de las disposiciones legales que garantizan el funcionamiento y operación de la Caja de Previsión, repercute en perjuicio de los derechos de los beneficiarios de la Caja de Previsión, para acceder a las prestaciones sociales que la misma establece.

En el presente caso, las autoridades demandadas violaron en perjuicio de la parte actora las garantías de audiencia y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al negarle la pensión por vejez/jubilación al C. ***** , manifestando que al momento de la solicitud no se encontraba cotizando esta acción no fue imputada a él, en todo caso a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que dejó de aplicar el descuento bajo la clave 151 por concepto de aportación a la Caja de Previsión y el Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero.

En esa tesitura, la Magistrada de la Sala Regional con sede en esta ciudad capital resolvió conforme a derecho al emitir la sentencia controvertida, analizando todas las cuestiones planteadas por las partes, asimismo, realizó el estudio integral de la demanda, contestación a la misma y demás constancias que integra el expediente de origen, tal y como se desprende de la sentencia controvertida, particularmente de los considerandos CUARTO y QUINTO se advierte que la juzgadora natural resolvió conforme a derecho al identificar y precisar el acto impugnado en el juicio de origen, tal y como aparece acreditado en autos, sin que se haya omitido cuestión alguna que haya sido propuesta por las partes, es decir, no se cambió ni se analizó un acto distinto al impugnado en el escrito inicial demanda, de tal forma que se apreciaron los hechos que constituyen el acto impugnado, como es la negativa para otorgar la pensión por vejez/jubilación del C. *****¹, no pasando desapercibido el derecho de seguridad social consistente en la pensión por VEJEZ contenida en el artículo 25 fracción III, Inciso b), 35 fracción II, 42 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos² que establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se constriñó a las demandadas para que procedan a otorgarle al C. *****³, la pensión por jubilación, correspondiente al 100% del sueldo básico, pensión que se comenzará a pagar a partir del día dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, fecha en que causó baja del servicio el C. *****⁴ (foja 042 de autos) y subsecuentes hasta regularizar al beneficiario antes citado en el pago de la pensión referida, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 25, fracción III, inciso a), 36 y 38 de la Ley de la Caja de Previsión en relación con el

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

92 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, dando con ello cabal cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia contenidos en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice:

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS. - Los agravios que no estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.”

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por los representantes autorizados de las autoridades demandadas devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar la nulidad del acto impugnado en el expediente número TCA/SRCH/201/2017, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, le otorgan, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos que ahora nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se;

R E S U E L V E

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por los representantes autorizados de las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en sus recursos de revisión recibidos en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el treinta de octubre del dos mil diecisiete, respectivamente, a que se contraen los tocas números TJA/SS/056/2018 y TJA/SS/057/2018, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia,

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo.

TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, formulando voto en contra el C. Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-

**M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS.**
MAGISTRADA PRESIDENTE.

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.
MAGISTRADA.

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO
MAGISTRADA.

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO
MAGISTRADO

VOTO EN CONTRA

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO.

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS